Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro.

**VISTOS** los expedientes formados con motivo de los recursos de revisión números **17433/INFOEM/IP/RR/2022 y 00250/INFOEM/IP/RR/2023** acumulados, promovidos vía **Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)**, vinculada a su vez al **Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX),** por **Victor Martinez,** en los sucesivo la **RECURRENTE**, en contra de las respuestas otorgadas a sus solicitudes de acceso a la información, por parte del **Ayuntamiento de Huixquilucan** en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO,** se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# ANTECEDENTES

1. El día catorce de noviembre de dos mil veintidós**,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía **SAIMEX**, las solicitudes de acceso a la información registradas con los números **00681/HUIXQUIL/IP/2022 y 00682/HUIXQUIL/IP/2022** mediante las cuales se solicitó la siguiente información:

**Número de Folio de la Solicitud: 00681/HUIXQUIL/IP/2022**

*"solicito relación de estudios, consultoria, asesorías y sus expedientes que integran la comnprobacion de estos, denominados entregables por parte de los proveedores, que realizo y adquirió en los años 2017 y 2018, incluyendo precio total con iva de cada uno, descripción, lista de conceptos con precios desglosados, expedientes de las sesiones de trabajo que se llevo, y el oficio de el área, donde manifieste que no cuenta con recurso humano calificado para realizar tales acciones, por lo que tuvo que contratar estos servicios."*

**Número de Folio de la Solicitud: 00682/HUIXQUIL/IP/2022**

*"solicito relación de estudios, consultoria, asesorías y sus expedientes que integran la comprobacion de estos, denominados entregables por parte de los proveedores, que realizo y adquirió en los años 2019 y 2020, incluyendo precio total con iva de cada uno, descripción, lista de conceptos con precios desglosados, expedientes de las sesiones de trabajo que se llevo, y el oficio de el área, donde manifieste que no cuenta con recurso humano calificado para realizar tales acciones, por lo que tuvo que contratar estos servicios."*

1. El cinco de diciembre de dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO** solicito laampliación de plazo por siete días para responder las solicitudes de información, registradas en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX); presentado por el Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Administración y Oficina de Presidencia, con fundamento en el artículo 6 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 5 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3 fracción IV, 4 primer párrafo, 49 fracción II, 163 segundo párrafo y demás relativos y aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y Municipios.
2. El día quince de diciembre dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO**, dio respuesta a las solicitudes de acceso a la información, a través de los archivos siguientes:

**Folio de la solicitud: 00681/HUIXQUIL/IP/2022**

Archivos **RESPUESTA 681-682.pdf, E18092336.pdf, FOLIO 681-682.pdf** y **OFICIO OP-813-22.pdf,** cuyo contenido corresponde al informe y cuadernillo de trabajos realizados, contratados con la empresa Consultores y Asesores Serca S.C. referente a los servicios profesionales para el Dictamen de la determinación y pago del puesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del ejercicio fiscal 2017, por su parte dos servidores públicos habilitados diversos manifiestan no contar con información al respecto luego de una búsqueda exhaustiva de lo solicitado.

**Folio de la solicitud: 00681/HUIXQUIL/IP/2022**

**RESPUESTA 681-682.pdf, Respuesta solicitud 682 SAIMEX.pdf, E20120226.pdf, E19090039.pdf, FOLIO 681-682.pdf, 20221215140341446.pdf, E19080303.pdf, E20120007.pdf, E19100196.pdf, E19060406.pdf, E19110330.pdf, E20080161.pdf** y **OFICIO OP-813-22.pdf**, cuyo contenido corresponde de manera general a 6 estudios, que de acuerdo a lo informado por el Secretario Técnico Municipal, se realizaron en los años 2019 y 2020, mismo que se remite su expediente de cada uno de ellos.

1. Inconforme con lo anterior, en fecha veinticuatro y veintiséis de junio de dos mil veintidós, el particular interpuso los recursos de revisión en contra de las respuestas, señalando los siguientes motivos o razones de inconformidad:

Folio del recurso de revisión: **17433/INFOEM/IP/RR/2022**

**ACTO IMPUGNADO**: *“no se transparenta la información solicitada, la cual es publica, solicito conocer los expedientes de los contratos en mención, no información imprecisa o imparcia”*

Folio del recurso de revisión: **00250/INFOEM/IP/RR/2023**

**ACTO IMPUGNADO:** *“Se negó el sujeto obligado a transparentar lo solicitado, violando mi derecho humano al acceso a la información.”*

1. Consecutivamente*,* con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los recursos de referencia, fueron turnadosa los **Comisionados María del Rosario Mejía Ayala** y **José Martínez Vilchis** respectivamente,con el objeto de su análisis.
2. Los Comisionados Ponentes de origen con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través de los acuerdos de admisión de fechas diez y diecinueve de enero de dos mil veintidós, pusieron a disposición de las partes los expedientes electrónicos en la vía interpuesta; a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, y el **SUJETO OBLIGADO** presentará los Informes Justificados procedentes.
3. Posteriormente el Pleno de este Órgano Autónomo, en la **Tercera Sesión Ordinaria** de fecha **veinticinco de enero** **de dos mil veintitrés**; ordenó la acumulación de los recursos de revisión de mérito, a efecto de que la Ponencia de la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala** formulara y presentara el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con el numeral ONCE incisos b) y c) de los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como de los Recursos de Revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia Estatal*[[1]](#footnote-1)*, que señala:

***“ONCE.*** *El Instituto, para mejor resolver y evitar la emisión de resoluciones contradictorias, podrá acordar la acumulación de los expedientes de recursos de revisión, de oficio o a petición de parte cuando:*

*…*

*b) Las partes o los actos impugnados sean iguales*

*c) Cuando se trate del mismo solicitante, el mismo SUJETO OBLIGADO, aunque se trate de solicitudes diversas;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. Es así que,resulta conveniente su trámite de forma unificada para mejor resolver y evitar la emisión de resoluciones contradictorias, por ello resultó procedente que este Órgano Garante realizara la acumulación respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria, en términos del artículo 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, que a la letra señalan:

***Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.***

***“Artículo 18.-*** *La autoridad administrativa o el Tribunal acordarán la acumulación de los expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan, de oficio o a petición de parte, cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente, para la separación de los expedientes.”*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

***“Artículo 195.*** *En la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.”*

(Énfasis añadido)

1. El **SUJETO OBLIGADO** el diecinueve de enero y tres de febrero de dos mil veintitrés rindió los informes justificados correspondientes a los expedientes electrónicos objeto de acumulación para el recurso de revisión 17433/INFOEM/IP/RR/2022, se confirma la respuesta inicial, por su parte el Director General de Administración establece que luego de una nueva búsqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado en cada uno de los archivos físicos y electrónicos que se encuentran bajo resguardo, no se encontró evidencia alguna de contratación de estudios, consultorías y asesorías dentro de la temporalidad exigida y bajo los términos establecidos.
2. Relativo al Recurso de Revisión 00250/INFOEM/IP/RR/2023 se confirma la respuesta inicial; asimismo el Secretario Técnico Municipal, señala que esa Unidad realizó 6 estudios en los años 2019 y 2020 y remite los comprobantes de los entregables de cada uno de ellos, por lo que confirma la respuesta inicial, con la finalidad de desestimar el motivo de inconformidad relativo a que se está negando transparentar lo solicitado.
3. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de junio y diez de julio de dos mil veintitrés la Comisionada Ponente amplió el término para resolver los recursos de revisión acumulados de mérito; en ese sentido se estima conveniente precisar lo siguiente:

* ***Argumentos a considerar en las resoluciones a los recursos de revisión para justificar los fallos emitidos fuera del plazo legal de 45 días.***

1. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400% el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
2. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
3. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
4. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
5. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
6. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
7. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
8. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
9. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.
10. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
11. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
12. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
13. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
14. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Finalmente, se decretó los cierres de instrucción mediante acuerdo de día cinco de marzo de dos mil veinticuatro y se ordenó turnar el expediente a resolución, por lo que no habiendo más que hacer constar, y -----------------------------

# CONSIDERANDO

# PRIMERO. De la competencia

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios..

## SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.

1. Los medios de impugnación fueron presentados a través del **SAIMEX,** dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó sus respuestas en fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del dieciséis de diciembre al veintitrés de enero de dos mil veintitrés respectivamente; en consecuencia, **EL PARTICULAR** presentó sus inconformidades el día quince de enero de dos mil veintitrés; es decir dentro del lapso temporal legalmente establecido para tal efecto.
2. Ahora bien, de la revisión al expediente electrónico del SAIMEX se desprende que la parte solicitante en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública en el expediente que se revisa, tanto en la solicitud de información como en el recurso de revisión no proporciona su nombre completo para que sea identificado, ni se tiene la certeza sobre su identidad, sin embargo, es importante señalar también que el nombre de los solicitantes y recurrentes no es requisito indispensable para la tramitación del acto procesal específico en materia de acceso a la información, ello en estricto apego al numeral 155 párrafo tercero de la Ley de la materia, en concatenación con el 180 del mismo ordenamiento.
3. Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafos vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, además de que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal y local.
4. Por lo cual, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
5. En ese entendido, se omite un análisis más profundo en torno a los conceptos de interés jurídico y legitimación, debido a que se estima que a ningún efecto práctico conduciría, puesto que la propia estructura del derecho fundamental bajo análisis no lo exige.
6. Por lo que el nombre del solicitando y recurrente no puede ser considerado un requisito indispensable de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, ya que el acceso a la información no está condicionado a acreditar algún interés ya sea jurídico o legítimo, *máxime* que es un elemento subsanable por este Instituto.
7. Por otro lado, los escritos contienen las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

## TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se desagrega:

* **Estudios, consultorías, asesorías y sus expedientes, denominados entregables por parte de los proveedores, que realizó y adquirió en los años 2017 a 2020, incluyendo precio total con IVA, descripción, lista de conceptos con precios desglosados, expedientes de las sesiones de trabajo y, el oficio del área donde manifieste que no cuenta con recurso humano calificado para realizar tales acciones, por lo que tuvo que contratar estos servicios.**

1. El **SUJETO OBLIGADO**, en respuesta remitió los documentos ya descritos en el anterior Párrafo 2. Inconforme con las respuestas el solicitante interpuso los recursos de revisión en los que expuso *grosso modo* su inconformidad porque a su decir existe una negativa de entrega de la información solicitada y la entrega de información incompleta.
2. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, **fracción I y V** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**; fracciones que determinan la hipótesis jurídica relativa a la negativa de la información y la entrega de información incompleta; contexto del cual se dolió **LA RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el **SUJETO** **OBLIGADO** con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaantes señalada.

## CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.

* **Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.**

1. Acotada la *Litis* del asunto de mérito, es dable puntualizar inicialmente en términos generales, que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1, así como en el artículo 6°, apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.
2. Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 70 que la información que corresponde a las Obligaciones de Transparencia debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada. En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.
3. En el mismo sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece en su artículo 12 que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma, del mismo modo, el artículo 18 establece que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
4. Finalmente, es relevante mencionar que el artículo 19 del ordenamiento local de la materia señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

* **Estudio de fondo**

1. En ese tenor, es de recordar que se solicitó estudios, consultorías, asesorías y sus expedientes, denominados entregables por parte de los proveedores, que realizó y adquirió en los años 2017 a 2020, incluyendo precio total con IVA, descripción, lista de conceptos con precios desglosados, expedientes de las sesiones de trabajo y, el oficio del área donde manifieste que no cuenta con recurso humano calificado para realizar tales acciones, por lo que tuvo que contratar estos servicios.
2. No obstante, no fue impugnada en su totalidad, toda vez que dentro del Recurso de Revisión número 17433/INFOEM/IP/RR/2022, se tuvo a bien impugnar únicamente el punto relativo a los expedientes en estricto sentido, como se observa: “*no se transparenta la información solicitada, la cual es publica,* ***solicito conocer los expedientes de los contratos en mención****, no información imprecisa o imparcial.”* Énfasis añadido
3. De tal forma que, la parte de la solicitud que no fue impugnada debe declararse consentida, toda vez que al no realizar manifestaciones de inconformidad; no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que no realizó manifestación alguna al respecto.
4. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

1. De la interpretación del criterio antes citado, se advierte que cuando el particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, por tanto estos deben declararse atendidos, pues se entiende que **EL RECURRENTE** está conforme con la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO,** al no contravenir la misma.
2. Atento a ello, es importante traer a contexto la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

1. En consecuencia que los demás fundamentos remitidos en respuesta. Se consideran un acto consentido y, en consecuencia, este Órgano Resolutor no entrará al estudio del mismo por las razones hasta aquí expuestas.
2. Luego entonces, el estudio se abocara al análisis de los rubros combatidos y que son:

* **Expedientes relacionados estudios, consultoría, asesorías denominados entregables por parte de los proveedores, que realizó y adquirió en los años 2017 y 2018; y**
* **Estudios, consultorías, asesorías y sus expedientes, denominados entregables por parte de los proveedores, que realizó y adquirió en los años 2019 y 2020, incluyendo precio total con IVA, descripción, lista de conceptos con precios desglosados, expedientes de las sesiones de trabajo y, el oficio del área donde manifieste que no cuenta con recurso humano calificado para realizar tales acciones, por lo que tuvo que contratar estos servicios.**

1. Ahora bien, en relación a los expedientes de los años 2017 y 2018, se informó lo siguiente:

**RESPUESTA 681-682.pdf:** El servidor público habilitado de la Dirección General, informó que derivado de u na búsqueda exhaustiva, minuciosa y considerable, en los archivos físicos y electrónicos que se encuentran bajo resguardo de esa unidad administrativa, no se encontró procedimientos que evidencien la contratación, de estudios, consultorías y asesorías dentro de la temporalidad establecida y bajo los términos planteados en la solicitud.

**FOLIO 681-682.pdf:** que corresponde a un oficio signado por el Coordinador Administrativo de la Secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual informa que luego de una búsqueda amplia y exhaustiva en los archivos que obran bajo resguardo de esa oficina, esa Coordinación no es la responsable de administrar dicha información, por ser deber de publicarla la Dirección General de Administración y se encuentra disponible en la Plataforma de Información Pública de Oficio.

Luego entonces informa, que en el año 2017 la Secretaria del Ayuntamiento no solicito la contratación de ningún servicio a la Dirección de Administración por no requerirlo y por lo relativo al 2018, se proporciona un recuadro con los rubros de año, descripción de obras, bienes o servicios contratados y/o adquiridos, Unidad Administrativa Solicitante (de las que se advierten la Dirección Jurídica, Departamento de Patrimonio Municipal), liga electrónica de consulta en IPOMEX.

**OFICIO OP-813-22.pdf**: oficio mediante el cual el Jefe de Oficina de la Presidencia, informa que luego de una búsqueda exhaustiva y razonable, no se encontró información en los términos planteados.

**E18092336.pdf**: que corresponde a un informe y cuadernillo de trabajos realizados en agosto de 2018 contratados con una empresa referente a los Servicios Profesionales para el Dictamen de la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Huixquilucan, cuya área usuaria es la Sub tesorería de Inversión y Gasto Público.

1. De lo anterior se desprenden diversos aspectos, el primero de ellos, que de los pronunciamientos emitidos por el **SUJETO OBLIGADO**, este Órgano Garante carece de facultades para dudar de la veracidad de tal pronunciamiento, por lo anterior resulta necesario puntualizar con claridad que éste Órgano Garante no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto *máxime* que **al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se presume veraz, tan es así que la misma queda registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).**
2. Sirviendo de apoyo a lo anterior por analogía, el criterio 31-10 emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:

*El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos* ***no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados.*** *El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.*

1. Así mismo, la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y Municipios** establece que la información pública generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información, por lo que deberán apegarse en todo momento a los criterios de publicidad, veracidad, oportunidad entre otros, numeral en comento que a la letra señala;

*Artículo 3.- La información pública generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.* ***Los Sujetos Obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.***

1. Numerales que compelen al **SUJETO OBLIGADO** a apegarse en todo momento a los criterios ya expuestos, imipidiendo a este Órgano Colegiado cuestionar la veracidad de la información. En ese contexto, en razón del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que la obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, se tiene por colmado el derecho de acceso a la información pública del particular, como deberá de prevalecer en el presente asunto para el debido cumplimiento del presente proveído.
2. En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública por disposición del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública.
3. Es por ello que, el derecho de acceso a la información pública, implica el conocimiento de los particulares de la información contenida en los documentos que posean los órganos del estado; incluso, se impone la obligación a las autoridades de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados.
4. En esa línea de pensamiento, no se duda de la veracidad del pronunciamiento de que en el ejercicio fiscal 2017, no se localizó información previa búsqueda exhaustiva y minuciosa en archivos físicos y digitales, lo que –además– también es una contestación procedente por corresponder a hechos negativos, contexto en el que resultaría innecesaria una declaratoria de inexistencia en términos de 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y ante un hecho negativo resulta aplicable la siguiente tesis:

***“HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACION.***

*Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por qué invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.”* ***[Sic]***

1. Por su parte, el artículo 12 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** señala que la obligación de proporcionar información **no comprende** el procesamiento de la misma:

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados* ***sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos******y en el estado en que ésta se encuentre.*** *La obligación de proporcionar información* ***no comprende*** *el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o práctica investigaciones.*

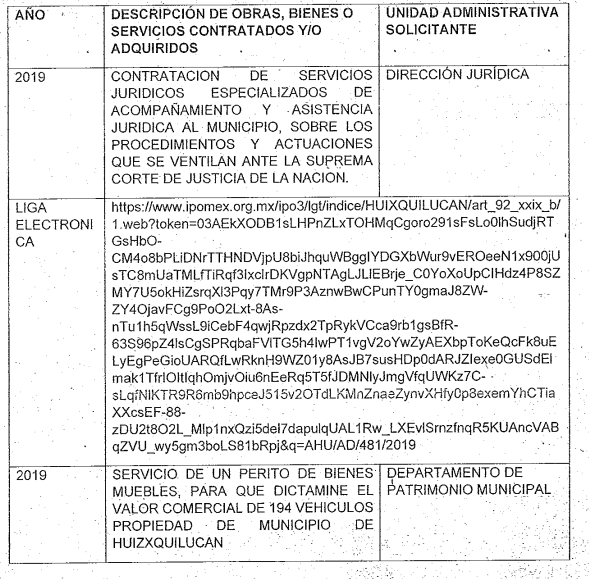
1. Entonces, dado a que el criterio en mención establece que las autoridades **no están obligadas a generar documentos *ad hoc*** en contrario sensu, dicho criterio se puede interpretar resultando que las autoridades no están impedidas a generar documentos “ad hoc”, esto, siempre que con dicho documento elaborado se dé cabal cumplimiento a los requerimientos planteados, como resulta del caso concreto.
2. En ese mismo entendido, a pesar de que el artículo 12 de la Ley de la materia señala que no están obligados a procesar, ni presentarla conforme al interés del solicitante, resumirla, efectuar cálculos o generar nuevos documentos para atender una solicitud, la ley tampoco lo prohíbe, es decir, los **SUJETOS OBLIGADOS** pueden adoptar como buena práctica para atender las solicitudes de acceso a información pública la elaboración de documentos que satisfagan el derecho, dicho de otro modo, pueden proporcionar la información que atienda las solicitudes, proporcionando aquella información que atienda de manera exacta, concreta y completa dado que no están impedidos y no es una prohibición que la ley contemple, por ello, la generación de documentos *ad hoc*, puede llevar a cabo siempre y cuando se haga garantice el derecho, por tanto lo dable es dable tener por colmado dicho rubro.
3. Asimismo, recordar que quien emite el pronunciamiento es el Coordinador Administrativo de la Secretaria del Ayuntamiento, señalando al mismo tiempo, que es Coordinación no es la responsable de administrar dicha información, la misma es publicada por la Dirección General de Administración; contexto que el servidor público habilitado de dicha área como lo es el Director General de Administración confirma en respuesta e informe justificado.
4. Ahora bien, también es dable recordar que en el presente asunto el **SUJETO OBLIGADO** no niega haber realizado adquisiciones de bienes o servicios con empresas en el siguiente periodo, tan es así que señaló direcciones electrónicas donde teóricamente obra la información requerida respecto de diversas áreas de su estructura orgánica; sin embargo, de los hipervínculo entregados no fueron remitidos con las características que establece la ley de la materia para que el acceso a la información sea colmado a través de enlaces de internet, toda vez que obran en un documento de solo lectura, es decir que no es editable o en datos abiertos que permita ingresar a través de un clic, por lo que para acceder a su contenido es a través de su captura manual, la que además se vislumbra complejo, por corresponder a una dirección electrónica extensa y encriptada, es decir mediante código.
5. Al respecto, en los artículos 11 y 161 de la Ley de Transparencia estatal, en los que se señalan las características que debe tener toda información entregada por los sujetos obligados desde el momento de su generación, publicación y entrega, así como la forma en que se deberá consultar la información, señalando una fuente precisa y concreta, como se observa a continuación:

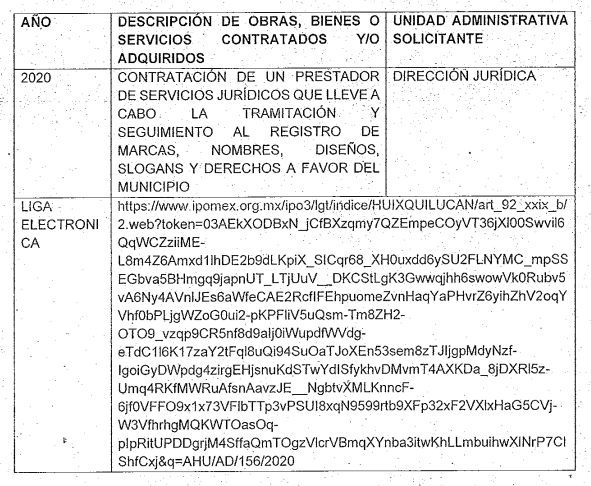
***Artículo 11.******En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible****, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.*

*(…)*

***Artículo 161.******Cuando la información requerida por el solicitante ya esté*** *disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos* ***disponibles en Internet*** *o en cualquier otro medio,* ***se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.***

1. De los artículos transcritos se establecen las características que debe tener la información desde el momento de su generación, publicación y entrega; de igual manera se contempla el procedimiento a seguir por los sujetos obligados para informar a los solicitantes sobre información que se encuentre disponible en libros, compendios, formatos electrónicos, entre otros, haciéndole saber al solicitante como podrá consultar, reproducir o adquirir la información, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, comprendiendo:
2. La fuente,
3. El lugar, y
4. La forma.
5. Asimismo, se establece que la fuente de la información deberá ser:
6. **Precisa,**
7. **Concreta,**
8. Y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.
9. Imperativos legales que establecen el procedimiento que debe seguir el Sujeto Obligado para que pueda tomarse como válida su orientación sobre la forma en que puede consultar la información requerida, y que, en el caso en concreto, no acontece por las consideraciones inicialmente expuestas, las cuales claramente indican que los enlaces pierden su calidad de precisos y directos, y por ende, no se puede considerar que lo manifestado por el Sujeto Obligado satisfaga el derecho de acceso a la información pública del **RECURRENTE.**
10. Así, dado que el Sujeto Obligado aceptó contar con la información pues señaló que podía ser consultada en el portal IPOMEX toda vez que se encuentra debidamente cargada en dicho sistema, este Instituto considera que los motivos de inconformidad del Recurrente devienen fundados, siendo procedente ordenar la entrega de la información requerida y en el lapso temporalmente delimitado por el particular solicitante.
11. Por lo que hace a los ejercicios 2019 y 2020, la respuesta iniciar versó en el mismo sentido, luego de que adjuntara el mismo recuadro, que contiene también los enlaces a esos ejercicios como se aprecia de los siguientes extractos a forma de ejemplo:





1. Atento a lo anterior, se tienen por reproducidos los argumentos relativos a las características que deben poseer los hipervínculos de Internet entregados que pretendan colmar el acceso a la información de los solicitantes, en obvio de repeticiones innecesarias teniéndolos por reproducidos en el presente apartado como si a la letra se insertaren; por lo que en relatadas circunstancias resulta natural que debe ordenarse de nueva cuenta los expedientes correspondientes a los ejercicios de mérito.
2. No pasa desapercibido que el **SUJETO OBLIGADO** con sus respuestas e informes justificados negó contar con la información, al contrario, asume que si género, posee y administra soporte documenta al respecto en ejercicio de sus funciones de derecho público, por lo que es dable omitir un análisis pormenorizado de su fuente obligacional a efecto de concluir si genera, posee o administra lo solicitado, pues como ya se estableció, ya asumió que si ejerció esa atribución; no obstante, ello no es impedimento para traer a contexto Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios[[2]](#footnote-2) en los artículos 26, 27 y 29, los cuales disponen lo siguiente:

***Artículo 26****.-* ***Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública.***

***Artículo 27****.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y* ***los ayuntamientos podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante las excepciones al procedimiento de licitación que a continuación se señalan:***

*I. Invitación restringida.*

*II. Adjudicación directa.*

***Artículo 29.- En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes.***

*Todo licitante que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la licitación tendrá derecho a presentar su propuesta. Las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún participante.*

1. De lo anterior, se advierte que las adquisiciones de bienes o servicios que realicen *-*entre otros- los Ayuntamientos, deberán llevarse a cabo, por medio de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, y/o adjudicaciones directas, no pasa desapercibido para este Instituto que lo solicitado no sólo se trata de información pública, sino además que se encuentra dentro de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 92, fracción XXIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que se transcribe a continuación:

***Capítulo II***

***De las Obligaciones de Transparencia Comunes***

***Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

***I a XXVIII …***

***XXIX.*** *La información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberán contener,* ***por los menos****, lo siguiente*

1. *De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:*

*1) La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;*

*2) Los nombres de los participantes o invitados;*

*3) El nombre del ganador y las razones que lo justifican;*

*4) El área solicitante y la responsable de su ejecución;*

*5) Las convocatorias e invitaciones emitidas;*

*6) Los dictámenes y fallo de adjudicación;*

*7) El contrato y, en su caso, sus anexos;*

*8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;*

*9) La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;*

*10) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;*

*11) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;*

*12) Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;*

*13) El convenio de terminación; y*

*14) El finiquito.*

*b) De las adjudicaciones directas:*

*1) La propuesta enviada por el participante;*

*2) Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;*

*3) La autorización del ejercicio de la opción;*

*4) En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y sus montos;*

*5) El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada;*

*6) La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;*

*7) El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;*

*8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;*

*9) Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;*

*10) El convenio de terminación; y*

*11) El finiquito.*

1. Es así que la información relativa a los procesos de adquisición de bienes y servicios, al ser información pública de oficio contemplada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debe ponerse a disposición de cualquier persona que la solicite, como se ha concluido del caso concreto.
2. Con la determinación a la que se arriba se concluye que quedará por colmado el Derecho de Acceso a la Información Pública del ahora **RECURRENTE** el cual se define como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[3]](#footnote-3)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona* física*, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[4]](#footnote-4)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[5]](#footnote-5)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[6]](#footnote-6)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
3. Se deduce que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano constitucionalmente reconocido, en consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

1. En tal sentido, el derecho de acceso a la información constituye una garantía primaria, tal y como lo señala el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, que además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
2. Es así que la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,** cuyo objeto es establecer principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; en su artículo 176establece que ***el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública*, s**iendo éste el medio a través del cual, este Órgano Garante después de realizar el análisis al procedimiento de acceso a la información, podrá determinar la posible afectación y de ser el caso ordenar la reparación a la violación del derecho en cuestión.
3. Ahora bien, para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto, para darnos un mejor panorama:

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

1. Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los sujetos obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Resulta necesario referir que, el artículo 6° apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, guardan una estrecha relación, puesto que los ordenamientos citados concurren refiriendo que **los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,** considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen, posean o administren.
3. Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12 (antes transcrito), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

1. Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[7]](#footnote-7) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.
2. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899.

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.”*

1. Como se ha señalado, los Sujetos Obligados deberán proporcionar toda la información que se encuentre en su posesión bajo los estándares más altos de transparencia y máxima publicidad.

**QUINTO. De la versión pública.**

1. **Nociones generales.**
2. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada**,** obran datos personales susceptibles de protegerse, así como información susceptible de clasificarse como reservada, el **SUJETO OBLIGADO** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados, como se advierte de los documentos remitidos en la respuesta inicial.
3. Al respecto es de suma importancia mencionar en el caso específico en las referidas documentales esta Autoridad concede con testar o suprimir de manera enunciativa mas no limitativa, el nombre de los accionistas/socios, nacionalidad o lugar de origen, domicilio, estado civil, ocupación, CURP y demás datos personales que se mencionan en las documentales.[[8]](#footnote-8)
4. En esta tesitura, cabe precisar que el Código Civil del Estado de México establece entre otras cosas, que como atributos de la personalidad se encuentra el nombre, el cual designa e individualiza a una persona, en este sentido debe precisarse que en sus artículos 2.13, 2.14 y 2.16, el nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que, de común acuerdo determinen, por lo que se refiere al nombre de las personas jurídicas colectivas este se forma con la denominación o razón social, asignada en el acto de su constitución o en sus estatutos.
5. Aunado a lo anterior debe mencionarse que los artículos 2.3 y 2.4 del Código Civil del Estado de México establecen lo siguiente:

***Atributos de la personalidad***

*“****Artículo 2.3.-*** *Los atributos de la personalidad son el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio.*

***Concepto y naturaleza de los derechos***

***“Artículo 2.4.-*** *Los derechos de la personalidad constituyen el patrimonio moral o afectivo de las personas físicas. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y goza de ellos también la persona jurídica colectiva en lo que sea compatible con su naturaleza.*

*Es deber del Estado proteger, fomentar y desarrollar estos* derechos*.*

(Énfasis añadido)

1. De los dispositivos legales descritos, se advierte que como atributo de la personalidad se encuentra el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio de las personas, y que es deber del estado proteger, fomentar y desarrollar estos derechos, en esta misma tesitura es conveniente precisar que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en su artículo 4 fracción XI establece lo siguiente:

*“****Artículo 4.*** *Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Datos personales:******a la información concerniente a una persona*** *física o* ***jurídica colectiva identificada o identificable****, establecida en cualquier formato o modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se considerará que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico.*

*…”*

1. Por lo anterior, se justifica que el SUJETO OBLIGADO haya censurado el nombre, nacionalidad y/o lugar de origen, fecha de nacimiento estado civil, domicilio, de los acciones en consideración a que es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraria su ámbito de privacidad.
2. Se afirma lo anterior, en razón de que no se debe perder de vista que el derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados **estén protegidos, quienes deberán adoptar las medidas de seguridad administrativa, física y técnica necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales,** considerando además, que conforme al principio de finalidad todo tratamiento de datos personales que efectúen los sujetos obligados deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
3. Mención especial, amerita el nombre de los socios, los cuales corresponden aquellas persona que tiene participación en la propiedad o gestión de la empresa y que pueden ser individuos, otras empresas o entidades legales, y cada uno puede tener diferentes derechos y responsabilidades según el tipo de sociedad en la que estén involucrados, para el caso de que sean personas como se encuentran contenidos en las documentales de respuesta, deberán permanecer públicos en virtud que el conflicto de interés también es público por disposición legal y, que además ha tomado una dimensión preponderante en la opinión ciudadana, sobre diversos rubros como pudiera ser de familiares de servidores públicos en los entes de gobierno, y sólo con el nombre de los accionistas se puede verificar, lo que corresponde a una de las finalidades del acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
4. Por otro lado, dicho contexto resulta inaplicable para el nombre de los representantes legales, toda vez que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ha precisado en diversas ocasiones que la **firma y el nombre del representante legal de una persona moral**, no podría ser objeto de clasificación, ya que si bien el nombre y la firma corresponden a una persona física, esta actuó en nombre y representación de una persona moral, no a nombre propio; en consecuencia, el nombre y la firma, al haber sido objeto de dar cumplimiento a la normatividad y otorgar validez al acto jurídico celebrado, deben ser considerados como públicos, análisis aplicable al presente caso.
5. Derivado de ello, es imprescindible traer a colación lo que establece el Criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual menciona lo siguiente:

***“Datos de identificación del representante o apoderado legal. Naturaleza jurídica.*** *El nombre, la firma y la rúbrica de una persona física, que actúe como representante o apoderado legal de un tercero que haya celebrado un acto jurídico, con algún sujeto obligado,* ***es información pública****, en razón de que tales datos fueron proporcionados con el objeto de expresar el consentimiento obligacional del tercero y* ***otorgar validez a dicho instrumento jurídico****” NO así las firmas correspondientes a personas físicas, por lo que el sujeto obligado deberá de tomar en considera esta sugerencia.”*

1. Luego entonces, no pasa desapercibido para este Órgano Garante que los sujetos obligadosserán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas; asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.
2. Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera fundadas las razones o motivos de inconformidad que plantea el **RECURRENTE**, determinando **MODIFICAR** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, por lo que con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes.

**SEXTO. Vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales.**

1. Finalmente, como anteriormente se hiciera mención, de la revisión de las constancias que obran en la respuesta inicial, específicamente en dictámenes, acta constitutiva y acta de asamblea, se logra advertir que el **SUJETO OBLIGADO** dejó visibles de manera enunciativa mas no limitativa, nombres de personas que no tienen el carácter de servidores públicos o representantes legales, RFC, CURP, etcétera; lo cual transgrede lo establecido en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Sobre el particular, si bien, la presente resolución no tiene por objetivo investigar y determinar posibles violaciones al derecho de acceso a la información, toda vez que este Organismo Autónomo, advirtió la posible publicación de información susceptible de clasificarse como confidencial, se considera procedente dar vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales de este Instituto.

1. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 222, fracción V, de dicho ordenamiento, son causas de responsabilidad administrativa, entregar información clasificada como confidencial, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, fracción XXVI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, procede que el área competente investigue la posible comisión incumplimiento a la Ley, toda vez que, el artículo 223 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que este Instituto deberá dar vista a la Contraloría Interna, con el fin de que determine el grado de responsabilidad de los servidores públicos que incumplan con las obligaciones establecidas en la Ley.
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

# R E S O L U T I V O S

**PRIMERO**. Resultan parcialmente fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **17433/INFOEM/IP/RR/2022** y **00250/INFOEM/IP/RR/2023** acumulados,en términos de los Considerandos **CUARTO y QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICAN** las respuestas emitidas por el **Ayuntamiento de Huixquilucan** y se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, de ser el caso en versión pública la siguiente información**:**

1. **Expedientes de entregables de las adquisiciones por consultorías y asesorías del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; y**
2. **Expedientes de entregables de las adquisiciones por consultorías y asesorías del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, al mayor grado de desagregación con: precio total con IVA, descripción, lista de conceptos con precios desglosados, sesiones de trabajo y, el oficio del área usuaria que requiere de los servicios.**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición de **EL RECURRENTE**.

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de **diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE** la presente resolución, vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SÉPTIMO.** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracción XXVI y 24, fracciones XI, XII y XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, gírese oficio a la Dirección General de Protección de Datos Personales de este Instituto, en términos de lo dispuesto en el Considerando **SEXTO** la presente Resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS (06) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Emitidos por este Instituto y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno” en fecha treinta de octubre de dos mil ocho. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig192.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

   II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   … [↑](#footnote-ref-7)
8. **Ley General de Sociedades Mercantiles**.

   “**Artículo 6º**. La Escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener:

   1. - Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad;

   ...

   **V**.- El importe del capital social;

   **VI**.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización.

   Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;

   …

   **XI**.- El importe del fondo de reserva;

   … ” [↑](#footnote-ref-8)